



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Don Sergio Pascual Peña, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, plantean al Gobierno la siguiente:

PREGUNTA CON RUEGO DE RESPUESTA POR ESCRITO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las radiales han sido un negocio desastroso que ha supuesto la quiebra de varias sociedades y de una gran inmovilización de recursos por parte de todos los españoles. Los impactos ambientales económicos y sociales han sido muy elevados mientras el negocio ha sido inexistente. El nefasto diseño inicial por parte del Gobierno del PP de 1997 y las empresas concesionarias que realizaron unas previsiones de tráfico absolutamente fuera de la realidad, unido al silencio cómplice de los siguientes gobiernos del PSOE y del PP hicieron que siguiera aumentando el problema y tenga ya dimensiones descomunales. En efecto, el tráfico ha sido menor porque la demanda no acepta pagar peajes cuando hay autopistas libres en paralelo a las de peaje, los costes de las expropiaciones, que supusieron un aumento de coste para el Estado cifrado en al menos 2.000 millones, supusieron un lastre impagable; y el diseño de los pliegos de concesión permitía, con una serie de cláusulas totalmente abusivas para el interés general, que permitía que los concesionarios, si los beneficios no llegaban a lo esperado, deberían ser compensadas por el Estado. Todo el proyecto sigue la lógica neoliberal -de buscar el beneficio empresarial a cualquier precio y privatizar el beneficio y socializar las pérdidas- y ponen en cuestión los procesos de colaboración público-privada que tanto se han predicado como remedio al estancamiento económico los teóricos neoliberales.

Las radiales R-3 y R-4 estaban controladas por Abertis, que tiene el 35% del capital de su sociedad concesionaria (Acesos de Madrid), en la que también participa Sacyr, con un 25%, y Bankia y ACS, con un 20% cada uno. La circunvalación de Alicante (Ciralsa) está controlada por ACS, con un 50%, y por Abertis y Globalvia, con un 25% respectivamente. Actualmente los tráficos de las vías comienzan a recuperarse ligeramente. La R-3 cerró el ejercicio 2015 con un aumento del 12,5% en el número medio de usuarios diarios y la R-5, del 9,7%. Además de estas infraestructuras ya en liquidación, también están en concurso las otras dos radiales (R-2 y R-4), la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.

El contrato firmado por el gobierno del PP con las concesionarias suponía en caso de liquidación, como así finalmente ha ocurrido, asumir las vías y su gestión, y responder a la denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado ante los actuales concesionarios de las autopistas, una partida que en el caso de las ocho infraestructuras asciende en torno a unos 4.500 millones.

El Ministerio de Fomento del Partido Popular y las concesionarias en la última legislatura no han logrado cerrar un acuerdo respecto al plan de rescate que había diseñado el Ministerio de Fomento. Esta ausencia de acuerdo ha provocado que los procesos concursales en los que están inmersas las vías desde hace años estén derivando hacia una cascada de liquidaciones. El plan del Gobierno pasa por que el Estado asuma las autopistas tras aplicar una quita del 50% en la deuda que soportan. Sin embargo, el actual ministro en funciones, tomando unas decisiones que no le corresponden y sobre todo después del fracaso de antecesora en llegar a un acuerdo durante toda la legislatura ha presentado un plan al juez para el recate de las radiales.

Una vez más el gobierno del PP olvida el rescate de las personas pero asume el rescate de las grandes empresas y de los bancos que se meten en negocios ruinosos Y se suma al caso del almacén de gas del Castor que, también por una nefasta planificación, supuso que los usuarios de gas pagarán 4.700 millones en 30 años que incluye la indemnización más los intereses por parar las instalaciones; o el caso de los accesos ferroviarios con Francia que también afecta a



ACS; y de otras concesiones en quiebra que esperan al nuevo gobierno para empezar sus procesos de socialización de pérdidas.

PREGUNTAS

- ¿cuál es plan para el rescate que este gobierno en funciones está desarrollando para estas infraestructuras cuya gestión público-privada ha conducido a quiebras?
- ¿cuál va a ser el coste para los ciudadanos de unos contratos mal diseñados y peor vigilados por parte de la administración?
- ¿Cómo se va a dirimir la responsabilidad de los ejecutores de este nefasto negocio para todos?

Congreso de los Diputados, Madrid, 20 de octubre de 2016

El diputado Sergio Pascual Peña

GP Podemos-En Comú Podem- En Marea